

político de límites muy flexibles en donde, de un lado, las élites regionales mercantiles así pertenecieran a diferentes partidos encontraban puntos de alianza para el logro de sus intereses de clase; de otro, los partidos, así fueran sólo un referente imaginario, y precisamente por serlo, tuvieron la capacidad de aglutinar y mantener bajo la sombra de sus banderas las diferentes manifestaciones políticas regionales que se expresaban de acuerdo con la particularidad en los procesos de legitimación y aún si en el espacio económico estuviesen profundamente escindidos formaban parte de una colectividad política que luchaba por el control del aparato estatal.

En el tránsito de la legalidad jurídica de la República a la legitimación del Estado Nacional, el referente imaginario del bipartidismo fue el elemento activo y dinamizador y sobre esta trama básica se legitimó la precaria nacionalidad colombiana.

Es en esta aparente paradoja, entre un bipartidismo formal e institucional y un pluripartidismo regional de hecho, en donde puede explicarse el mantenimiento de una estructura de partidos ya desaparecida de otros lugares de América Latina<sup>14</sup>, y quizás del mundo entero, así como el aparente fracaso de alternativas políticas diferentes. Los intentos de crear nuevos partidos en Colombia o bien han terminado absorbidos e incorporados al interior de esas laxas fronteras que han separado a los tradicionales; o por el contrario, al enfrentar la ideología bipartidista lo ha tenido que hacer desde fuera, desde posturas internacionalistas que desdennan lo nacional porque quizás ese referente imaginario que funcionó para legitimar la Nación y la dominación de clase funciona también para las fuerzas contrarias al bipartidismo que, desde una postura de izquierda que olvidó el materialismo histórico, rara vez consultan las particularidades del espacio en el cual desarrollan su práctica y no intentan disputarle a los sectores dominantes en su propio campo el monopolio exclusivo de la Nación.

14. La estructura bipartidista se desvirtúa en la mayor parte de los países de América Latina durante la coyuntura de 1930. La emergencia de la industrialización, la urbanización y el fortalecimiento de los sectores obreros y pequeños burgueses posibilitó el surgimiento de nuevos partidos: socialdemócratas, demócrata-cristianos, socialistas, comunistas y populistas de varios matices; aparecen entonces en América Latina (excepto en Colombia) estructuras políticas pluripartidistas de tendencia clasista y se generalizan las alianzas o coaliciones de varios partidos en los procesos electorales. Para ampliar sobre este proceso véase: HALPERIN Donghi, Tulio. Historia contemporánea de América Latina. Alianza Editorial. Segunda edición. Madrid, 1970. Págs. 207-280.



Instituto de Estudios Regionales  
Unidad de Documentación

## La territorialidad de los conflictos y de la violencia en Antioquia\*

La violencia en Antioquia, así presente dimensiones más agudas y expresiones más dramáticas, no es un patrimonio exclusivo de sus habitantes como algunos lo han querido ver; no está hecha de una materia distinta ni se diferencia en sus rasgos y en sus manifestaciones de lo que afecta a todo el país.

La violencia que padece hoy el pueblo antioqueño es una expresión particular de un fenómeno nacional cuyas raíces se hunden en la historia colectivamente vivida y cuyos hilos se han venido tejiendo de diferente manera a lo largo de un devenir contradictorio y difícil, como son por lo general los asuntos de la historia humana.

Este fenómeno oscuro, complejo y diferencial, es un universal de la historia, una constante en la vida de la humanidad que asume manifestaciones distintas y desiguales según el tiempo y el lugar, que pasa por el tamiz de la cultura y de los

\* Este texto, si bien es de la exclusiva responsabilidad de su autora, recoge tesis e interpretaciones que de tiempo atrás se vienen desarrollando en el Instituto de Estudios Regionales —Iner—, de la Universidad de Antioquia, y en el grupo de estudio sobre la violencia de la misma institución. El trabajo se apoya también en la investigación: Las raíces del poder regional. El caso antioqueño, en coautoría con el economista Jesús María Álvarez García, en los aportes de la investigadora Mary Roldán sobre la violencia de los años cincuenta en Antioquia, en el trabajo: Determinantes sociales, culturales y políticos de la planeación en el oriente antioqueño, realizado por el Iner para la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare, —Cornare—, y en la colaboración y apoyo de la asistente de investigación, Historiadora Lucelly Villegas V. Mis reconocimientos y agradecimientos para todos ellos. Publicado en: Realidad Social. Tomo 1. Departamento Administrativo de Planeación. Gobernación de Antioquia. Edinalco. Medellín, 1990.

modos de vida asumiendo significaciones distintas y muy diversas, que es vista y sentida de acuerdo con la posición del sujeto en el evento violento (si se es víctima, victimario o espectador), que siempre se arma de discursos justificatorios y que presenta umbrales de tolerancia distintos fijados por la tradición, los valores y las costumbres.

En un país de regiones como es Colombia, y más que eso, en un país fracturado, escindido y atravesado por múltiples exclusiones y conflictos, donde la nación es aún un proyecto por construir y el Estado un ente tradicionalmente débil, carente de poder y aquejado por deslegitimidades históricas de gran envergadura, la violencia tiene necesariamente una dimensión regional asociada con la especificidad del entorno territorial y una dimensión temporal cuyos ritmos de desenvolvimiento no se corresponden con los de otras regiones o localidades. La violencia en Colombia está hecha de destiempos y desencuentros.

Pese a la historia oficial de cien años de centralismo institucionalizado y de vigencia de un régimen político fuertemente presidencialista las regiones colombianas son algo más que espacios jurídico administrativos o referentes territoriales para la planeación del desarrollo; lo han sido siempre y lo son ahora, realidades históricamente formadas, socialmente construidas, colectivamente vividas por sus pobladores y a veces también pensadas por sus dirigentes, por sus intelectuales que le imprimen un sentido político, una dirección y un horizonte de posibilidad a esa existencia histórica compartida mediante la formulación y puesta en ejecución de proyectos políticos y ético-culturales que terminan definiendo los perfiles de un ethos regional perfectamente diferenciable.

El antioqueño, el costeño, el santandereano, el caucano, el boyacense, son imágenes más evidentes y más concretas que la del colombiano, noción abstracta y generalizante, difícil de aprehender porque sigue siendo la sumatoria de todas las demás sin llegar todavía a la síntesis, dada la carencia de un verdadero proyecto de nación.

La violencia, desigual y regional, tiene también una expresión territorial; áreas o zonas integradas con la vida económica y social de país y espacios excluidos y vastos que escapan al control político del Estado y cuyos referentes culturales, modos de vida y de pensamiento, costumbres y tradiciones, no encuentran puntos de identidad con los que ofrece la sociedad mayor y con los que el Estado representa.

La dialéctica de las inclusiones y las exclusiones, de la integración desintegración, de las identidades y las diferenciaciones, se expresa en el ámbito territorial señalando fronteras histórico culturales y políticas que definen territorialidades muy diversas, así pertenezcan administrativamente a un mismo departamento o a un mismo país. Las territorialidades permiten construir una especie de geogra-

fía de los conflictos y de la violencia, proporcionando una nueva mirada sobre la región que coadyuva en el conocimiento de estos fenómenos y, por tanto, se constituye en un principio de solución.

Pretendo aquí mostrar las territorialidades de los conflictos y de la violencia en Antioquia siguiendo a grandes trazos el proceso de constitución histórica de la región, las crisis y rupturas de una propuesta original, que como toda propuesta tuvo un horizonte territorial muy definido y su expresión actual, vista a la luz de las múltiples dimensiones de la crisis por la que atraviesa Antioquia, cuya arista más sobresaliente es el drama de la violencia.

## El proyecto político de los antioqueños y su expresión geodemográfica

### La dialéctica de las inclusiones y las exclusiones

La región antioqueña se ha definido desde muy temprano en el contexto plurirregional del país como un espacio particular y concreto, con un ethos sociocultural muy definido que se manifiesta en un conjunto de valores y prácticas sociales a las que se les ha dado el nombre de "antioqueñidad", ensalzada y elevada a la condición de leyenda por unos, vituperada y acerbamente criticada por otros, pero perfectamente identificada y reconocida por propios y extraños.

Sin meternos en el problema valorativo de lo bueno o de lo malo, lo que queremos señalar aquí es que ese ethos sociocultural no fue sólo el fruto de un proceso espontáneo, de una historia librada a su propio devenir, de lo vivido por un pueblo que habitó un territorio y compartió una multitud de experiencias comunes solidificadas por la fuerza de los hechos y de las costumbres.

La vida en común hizo su parte pero el ethos sociocultural fue más que eso; fue el resultado, siempre inacabado, siempre en construcción, de un proyecto político y ético cultural propuesto desde muy temprano por los intelectuales orgánicos de la independencia de Antioquia; fue la expresión de la región pensada por sus dirigentes que buscaron sus raíces en el pasado reciente y que proyectaron una imagen de futuro que a la postre se convirtió en un referente de identidad para unos pobladores que empezaban apenas a descubrir las ventajas de la autonomía y la autodeterminación políticas.

El proyecto de los intelectuales orgánicos de Antioquia no fue sólo una formulación retórica, un decálogo de principios generales y abstractos enmarcados en el deber ser. Tuvo un contenido esencialmente práctico y fue convertido en legislación, en instituciones, en programas de acción mediante los cuales este grupo dirigente logró concitar el consenso de los pobladores y ganar legitimidad en tan-

to que el proyecto estaba anclado en la realidad de la vida antioqueña y en su sentido común.

Es bien interesante constatar cómo el discurso de los intelectuales, adoptado como propio por los hombres del común, era convertido en sermón por los curas de aldea, aparecía reproducido en la correspondencia de los comerciantes, se volvía fábula y cuento en las palabras de los arrieros, se comentaba en las fondas camineras y en los albergues improvisados de los mazamorreros que perseguían el oro en los ríos perdidos entre las montañas.

Los referentes concretos de identidad, convertidos por el proyecto político en sistemas simbólicos de representación (leyes, instituciones, normas), consolidaron procesos de cohesión social, integración cultural y política a través de la cual operaron con relativa eficiencia los mecanismos de control social y los recursos institucionalizados del poder público.

Este proyecto alumbró el proceso de la independencia de Antioquia que, dicho sea de paso, fue bien diferente al de la capital del virreinato elevado a la condición de modelo nacional por obra y gracia de la historia oficial. Pero lo que más sorprende del proyecto no es tanto su surgimiento prematuro como su duración, su estabilidad y su continuidad en el tiempo pese a los conflictos, las divergencias y las confrontaciones que marcaron la historia decimonónica de la región.

Este proyecto sólo empezó a mostrar síntomas de crisis en la mitad del siglo XX, y aún hoy algunos sectores empresariales y políticos del departamento quisieron revivirlo, como recurso mítico para conjurar la crisis —el rescate de los valores de Antioquia es la fórmula adoptada para encubrir la nostalgia que produce siempre lo irremediablemente perdido—.

Los enunciadores, sistematizadores y ejecutores del proyecto político, es decir, los intelectuales orgánicos de Antioquia, fueron en lo fundamental los miembros de las asambleas constituyentes de 1812 y 1813, entre los que vale la pena mencionar muy especialmente a Don José Manuel Restrepo, Don José Félix de Restrepo y Don Juan del Corral. Quienes los sucedieron sólo fueron continuadores del proyecto, lo perfeccionaron, lo prolongaron en el tiempo y lo expandieron en el territorio; a mantenerlo y reproducirlo contribuyeron hombres de los dos partidos: Pedro Justo Berrío (conservador), Manuel Uribe Ángel (liberal); Carlos Segismundo de Greiff (liberal), Pedro Nel Ospina (conservador), Alejandro López (liberal), Fernando Gómez Martínez (conservador), para citar sólo unos entre un grupo mucho más numeroso que se sucedió en la conducción de la vida republicana del departamento a lo largo de más de cien años de historia.

El aislamiento geográfico de Antioquia, unido a un régimen político de corte federativo que garantizó la autonomía de la región para resolver sus asuntos internos, contribuyó a la preservación del proyecto cuya quiebra se manifiesta cuando

el país empieza a integrarse económicamente y a volverse “nacional”, ya bien entrado el siglo XX.

El proyecto en cuya trama se construyó socialmente la región antioqueña tuvo tres dimensiones básicas: la económica, la éticocultural y la política; estos tres pilares formaron un verdadero trípode y lograron una gran coherencia, reforzándose mutuamente e imbricándose de tal manera que no es posible pensar en uno solo de ellos sin referirse a los otros dos.

El proyecto económico apuntaba a crearle bases sólidas al modelo mercantil especulativo con el cual esa élite se había enriquecido y cuyos obstáculos institucionales, devenidos del régimen colonial, fueron argumentos válidos para sacudirse el control que España ejercía sobre ellos.

El modelo mercantil implicaba consolidar y ampliar las redes comerciales de tal manera que se facilitasen los contactos entre buscadores de oro (grandes y pequeños) con comerciantes abastecedores de alimentos y productos de consumo, y de éstos con los grandes importadores y prestamistas, vendedores de barras de oro en los mercados de Londres, Bremen, Liverpool y París, y negociantes en letras de cambio que representaban los cupos para comprar en el exterior.

Esta red mercantil se expandió rápidamente después de la Independencia y se consolidó cuando los antioqueños lograron que el Congreso de 1850 aprobase la Ley 20 de descentralización de rentas y gastos, mediante la cual la élite provincial liberó el oro de “todo pecho y gravamen”; esta red así consolidada, cumplió la función bien importante de integrar territorios y localidades, establecer relaciones económicas anudadas en torno a la compra-venta, poner en contacto gentes de muchos lugares y condiciones sociales y fortalecer lazos de solidaridad, lealtad y cooperación entre gentes que compartían un mismo interés.

Esta red mercantil tuvo varios puntos de anudamiento, perfilándose desde muy temprano la ciudad de Medellín como el centro más importante, sede de las principales casas comerciales y bancarias, lugar donde se centralizó el oro producido en buena parte del occidente colombiano y, también, residencia de las autoridades civiles y religiosas. Además de Medellín, otras localidades fueron centros de mucha importancia y cumplieron en las zonas cercanas la función de anudamiento de esa compleja red de mercados regionales: Rionegro en el Oriente; Sonsón y Caramanta en el Sur; Jericó y Titiribí en el Suroeste; Santa Fe de Antioquia en el Occidente; Amalfi, Yolombó y Santo Domingo en el Nordeste, Santa Rosa y Yarumal en el Norte.

Esta red mercantil, a través de la cual se integró el espacio geodemográfico de la vieja Antioquia, fue algo más que intercambio de productos y de circulación monetaria; fue ante todo una trama de relaciones sociales en el más amplio sentido del término. Por ella circularon solidaridades, servicios recíprocos, noticias e

informaciones; en ella se anudaron relaciones parentales, adscripciones político-partidistas, relaciones de paternidad-filiación, de protección-representación, de alianza y complementariedad, de divergencias y conflictos; en fin, las redes mercantiles crearon toda una urdimbre en la que se reforzó y se legitimó el poder de la élite decimonónica y sobre la cual arraigaron identidades que hicieron de los pobladores dispersos y aislados un verdadero pueblo, con un sentido muy claro de la pertenencia y de la diferencia.

Para apuntalar el modelo mercantil especulativo se diseñó y se puso en ejecución todo un plan vial y de caminos que se correspondía con las necesidades de la exportación pero también con la integración de aquellos espacios territoriales que el modelo económico requería para su funcionamiento. Este plan de caminos fue enunciado originalmente por los constituyentes de 1813 y en las décadas posteriores se construyeron precisamente aquellas que habían sido consideradas como de primer orden por Don José Manuel Restrepo y Don Juan del Corral.

El modelo económico mercantil se apoyó en la estrategia de la colonización de frontera o ampliación del territorio socioeconómico, no porque la agricultura en sí misma fuese un interés prioritario del modelo, sino como condición del funcionamiento pleno de la red mercantil y caminera orientada hacia el abaratamiento de la explotación del oro, de la importación-exportación y para ofrecer recursos mínimos a los viajeros y sus recuas de mulas.

La estrategia colonizadora tenía varios aspectos: la distribución de tierras baldías o de propiedad privada pero inexplotadas, el plan de poblamiento, la ampliación de la ciudadanía y por ende de la sociedad civil y la generación de un modelo ético y cultural.

Se distribuyeron tierras a pequeños, medianos y grandes pobladores prácticamente en todas aquellas áreas y zonas de interés mercantil o minero, pero a más de los beneficios económicos se buscaba también crear una base amplia de propietarios arraigados a la tierra, que con recursos propios y con su familia desarrollaran su quehacer sin depender de otro y donde el interés individual por acumular y progresar económicamente tributase a la riqueza social.

Pensaba esta élite dirigente, y no le faltaba razón, que la ampliación de la base propietaria era una condición de la estabilidad del poder recién adquirido y que el trabajo material orientado hacia fines útiles era un principio regenerador de las costumbres y una garantía para la estabilidad familiar.

La estrategia de la colonización no se quedaba en la mera distribución de la tierra; se trataba también de poblar en el más amplio sentido del término. Fundar pueblos en aquellas áreas consideradas prioritarias para la extensión de la red mercantil; localidades integradas donde los nuevos pobladores contasen con los recursos materiales y espirituales para una vida en común. Estas fundaciones eran

puestas bajo la dirección de los párrocos, de las juntas de notables aldeanos que en muchas ocasiones eran los promotores del asentamiento; de los jueces pobladores encargados de distribuir la tierra y diseñar calles y plazas, y cuando el poblado adquiría condición institucional, los alcaldes y los cabildos entraban a jugar su papel. Estos grupos dirigentes locales se convertían en verdaderos dispositivos de poder desde donde se ejercía un muy eficiente control social y político.

Los vecinos de las localidades "con casa poblada", jefes de familias bien constituidas con tierra propia, cuya cantidad aumentaba de acuerdo con el número de hijos, fueron elevados a la condición de ciudadanos por la Constitución del Estado de Antioquia, sujetos de deberes y de derechos y partícipes de un orden democrático donde ellos podían elegir y ser elegidos, conformando así lo que podríamos llamar una sociedad civil local.

A las zonas de colonización y a la construcción de los caminos públicos fueron enviados también los maleantes y los "vagos", quienes eran puestos bajo la protección de un notable pueblerino "de reconocida solvencia moral" para que les enseñase algún oficio, además de hábitos de trabajo y de buen comportamiento social.

El ethos sociocultural del antioqueño aparece allí perfectamente diseñado, entre cuyos elementos más relevantes apuntamos los siguientes: el trabajo material como regenerador de las costumbres y como vía para el enriquecimiento individual que en un modelo mercantil hace la riqueza colectiva. La familia como paradigma del orden social y como espacio privilegiado para inculcar hábitos morales y de buen comportamiento, así como para el ejercicio del control social. El papel de la familia en la unidad productiva campesina y su importancia en la reproducción del ethos sociocultural, propició una legislación muy rígida contra todo aquello que pudiera erosionarla o descomponerla como la prostitución, el abandono de la casa paterna o del cónyuge, el concubinato, el madresolterismo; igual cosa ocurrió con aquellos comportamientos sociales que fuesen en contra del ethos del trabajo y del ahorro como el alcoholismo, los juegos de azar y la vagancia. //

Los valores morales y la ética orientada hacia fines útiles y terrenales de los cuales el modelo económico salía ganancioso, pasaba necesariamente por la honradez en los negocios, por el respeto a la palabra empeñada y a los compromisos contraídos, por la frugalidad en los modos de vivir, de comer y de habitar, por la sencillez en las costumbres; requerimientos éstos para el funcionamiento adecuado de una red mercantil de vastas proporciones basada en el crédito y en las lealtades primarias, cuya reproducción estaba garantizada más por el acatamiento y la interiorización de estos valores que por la fuerza coercitiva del Estado, de la ley o del derecho que fueron siempre débiles, ineficaces y formalistas. La prédica religiosa reforzaba este modelo ético en tanto que apuntaba a los mismos objeti-

Papel Social de la Familia

vos moralizadores y de control social; los párrocos hicieron parte de los dispositivos de poder local y se identificaron con los notables pueblerinos y la religiosidad; antes que afectar el proceso mercantil especulativo, le otorgaba el beneplácito “de lo alto”.

Este proyecto político y ético cultural, con todas sus aristas y dimensiones, fue configurando una cultura pueblerina y campesina con fuertes arraigos en los referentes concretos de la vida social, así como unos dispositivos de poder muy eficaces en el ámbito de la coerción y del control social, entre los cuales señalamos como los más importantes las redes parentales, los cabildos, las localidades, los vecindarios, las compañías comerciales y las sociedades de negocios.

Estos dispositivos de poder, a la vez mecanismos de control social, operaron fundamentalmente en la esfera de lo privado, en el espacio de la sociedad civil; lo público y lo estatal fueron epidérmicos y formalistas, y lo legal propiamente dicho no fue un referente orientador de la práctica social como sí lo fue el proyecto cultural que contó con una amplia legitimidad en el contexto sociodemográfico donde habitó el pueblo antioqueño.

*Regionalismo* El sistema de identidades que definió el perfil del ethos sociocultural antioqueño, tuvo una dimensión esencialmente regional y una expresión territorial que no se enmarcaba en el ámbito del Estado y la Nación; el único mecanismo articulador entre la región, las localidades y el ente nacional fueron los partidos tradicionales o mejor aún la estructura bipartidista. La única manera de sentirse nacional, de saber que se pertenecía a un ámbito sociopolítico y legal que trascendiese el horizonte parroquial fue la pertenencia al partido.

Este referente más imaginario que real fue la vía a través de la cual se formó la débil conciencia de lo nacional; se pertenecía a la nación en tanto que se perteneciese al partido; los partidos terminaron acotando la primera, encerrándola en sus límites y convirtiendo en “no nacional”, y por este camino en “antinacional”, todo lo que no estuviese inscrito en este espacio restringido. A su vez, los partidos terminaron siendo, más que opciones ideológicas y políticas, identidades colectivas. Quizá por eso todo lo que intente debatirles su patrimonio de la nación es visto como un ataque directo a su propio ser colectivo, a su propia identidad.

El proyecto político y ético cultural de los antioqueños, autónomo, aislado y a veces confrontado con las grandes corrientes que se movían en el territorio nacional, se planteó en el interior de la provincia como un horizonte abierto para los más audaces, los más capaces y los más útiles. En el campo económico los caminos estaban despejados, los cierres del modelo estuvieron en otro lugar: en la exclusión sistemática de todos aquellos que no se ajustaron a vivir de acuerdo con los parámetros básicos que rigieron este proyecto, que no quisieron o no pudieron articularse orgánicamente al modelo económico mercantil y al ethos sociocultural.

El proyecto político de los antioqueños generó una fuerte legitimidad en el territorio geodemográfico acotado por las redes mercantiles y sociales; es decir, en el espacio habitado por el pueblo antioqueño. Pero también creó exclusiones y diferenciaciones muy graves que están en la raíz de muchos de los conflictos y de las violencias actuales.

### Las deslegitimidades y las exclusiones

Un proyecto tan integrado, tan orgánico y cohesionado como éste, con tan fuertes referentes identificatorios, excluyó, separó y diferenció, incluso territorial y espacialmente, a todos aquellos que por muy diversas razones no hicieron parte del corpus social y de la trama mercantil. Al pueblo antioqueño no pertenecieron todos los habitantes de la región; algunos, aunque viviesen en el mismo territorio, fueron siempre considerados como extraños, diferentes. A su vez, el pueblo antioqueño desbordó los límites político administrativos y llevó su cultura pueblerina y campesina, su ethos social y sus identidades políticas a buena parte del occidente colombiano.

El pacto fundacional antioqueño, logrado mediante la independencia y la institucionalización de la república, fue un pacto entre criollos blancos del cual estuvieron ausentes las etnias dominadas —los indios y los negros—; la única manera que éstos tuvieron para acceder al corpus social, para ligarse a las redes mercantiles, para hacer parte del pueblo antioqueño, fue “blanqueándose”, es decir, negándose su propia identidad étnica, renunciando a sus orígenes, olvidándose de su cultura y “civilizándose”, para entrar al mundo de los blancos mediante la adopción de su lengua, su tradición, sus creencias y su ley.

El blanqueado, mecanismo por excelencia en la región para realizar el tránsito de las etnias a la formación del pueblo, se realizó bajo la dinámica de la inclusión-exclusión; incluyó los blancos y los blanqueados articulados por redes mercantiles abiertas a las que podía ligarse todo aquel que se presentase como comprador y vendedor, pero además quien aceptase el modo de vida, los valores de la cultura pueblerina y campesina y el sentido común de la antioqueñidad. A los “otros” los excluyó, los invisibilizó y sólo los nombró como problema, como potencial, o realmente conflictivos, como eventuales enemigos a los cuales se debería presionar para que aceptasen ese esquema de valores o mantenerlos alejados por el riesgo que significaba su mera existencia.

Mas la exclusión no se agotó en el pacto fundacional y en los intentos “civilizadores” de la élite antioqueña durante buena parte del siglo XIX; el proyecto excluyó también a quienes no se acogieron a los parámetros básicos del ethos sociocultural; a los vagos, a los “mal entretenidos”, a los que no hicieron del trabajo material orientado hacia fines útiles su divisa, a los beodos consuetudinarios,

a las prostitutas, a los hijos pródigos, a los mendigos y a los indigentes, a los que vivían en “concubinato público y escandaloso”, a los hijos naturales, a los delincuentes, a los perseguidos por la justicia, a los derrotados en las guerras civiles, a quienes no se casaban por la iglesia y no visitaban asiduamente el templo parroquial, a los ateos, a los masones, a los perdedores; en fin, a todos aquellos que con sus formas de vida o de pensamiento pusiesen en peligro la moralidad, las bases y fundamentos de la identidad del pueblo antioqueño.

El proyecto político de la élite antioqueña fue cohesionador, articulante y sólido pero terriblemente excluyente, incapaz de convivir con “el otro”, con el diferente o con el antagonista; a todos por igual los excluyó pensándolos como delincuentes y enemigos peligrosos. En este grupo social convergieron sectores muy diversos; desde mulatos y mestizos “indómitos y perezosos” hasta ricos herederos de grandes familias pero ateos y masones, pasando por mineros trashumantes aficionados al licor, al baile y las alianzas libres, por pueblerinos más atraídos por el trabajo intelectual que por despachar detrás de un mostrador o por grupos de mujeres que prefirieron trabajar independientemente sin la necesidad de la protección de un varón de su familia.

La dinámica de la inclusión-exclusión tuvo un referente geoespacial que se manifestó en la formación de territorialidades muy diversas y que cruzó la región de fronteras político culturales separando los espacios integrados y articulados con la sociedad mayor, de los espacios excluidos en los cuales nunca operó del todo el proyecto político de la élite antioqueña; sus habitantes no compartieron con los de la sociedad mayor referentes de identidad, no se sintieron parte del corpus social, parte del pueblo paisa, aunque habitasen en el mismo departamento. El sentido de exclusión fue formando en los pobladores de estas zonas mentalidades distintas, sentidos comunes y prácticas culturales diversas; interiorizaron y reprodujeron la exclusión, asumieron la diferencia impuesta como principio de la propia identidad y terminaron por pensarse a sí mismos como los “otros”, expresándose a través de formas culturales de resistencia y de supervivencia que están aún por estudiarse.

En estos territorios excluidos, el Estado sólo ha tenido una presencia formal (administrativa) o militar y antes que sistemas jurídico-legales de relación social y de control político, han operado contrapoderes o parapoderes por fuera de la institucionalidad del aparato formal.

Las territorialidades histórico culturales revelan la existencia de otra Antioquia, desconocida, ignorada, silenciada, que sólo empezó a ser tenida en cuenta cuando viejos y nuevos conflictos estallaron en forma de violencia generalizada e informe, poniendo en peligro la estabilidad y la seguridad de la sociedad mayor.

Las diversas territorialidades de Antioquia distinguen claramente una zona central que se corresponde en líneas gruesas con el poblamiento decimonónico, con

el espacio acotado por las redes mercantiles y por los partidos tradicionales y con el campo de expresión del ethos sociocultural del pueblo antioqueño.

Esta zona central se constituyó a partir de la tríada formada por Medellín, Santa Fe de Antioquia y Rionegro, prolongándose hacia el sur por las vertientes de las cordilleras central y occidental hasta más allá de los límites con el viejo Estado del Cauca, que entre otras cosas fue durante todo el siglo XIX una frontera de guerra y no en sentido metafórico: todas las confrontaciones civiles se desarrollaron en la zona limítrofe entre ambos pueblos y el norte caucano sirvió como refugio a muchos de los excluidos antioqueños de esos tiempos. La colonización del occidente colombiano tuvo un contenido político que no puede soslayarse.

El espacio geodemográfico tradicional incluye el suroeste cafetero, constituido históricamente a partir de la dinámica de cuatro localidades importantes: Titiribí, Fredonia, Jericó y Bolívar, área que se extiende hasta perderse en la frontera de la zona boscosa y húmeda de la selva chocona.

Esta zona céntrica se expande también hacia el Oriente comprendiendo el espacio construido a partir de la polaridad Rionegro-Marín, cuya frontera histórico cultural se localiza en la vertiente de la cordillera Central, siguiendo una sucesión de poblados “calentanos” que jugaron un papel estratégico en la vieja violencia y que hoy reflejan no sólo los impactos sociales y políticos de los megaproyectos hidroeléctricos del Estado, sino también la multipolaridad de los conflictos del vecino Magdalena Medio.

Esta zona de poblamiento tradicional se expande hacia el norte, cubriendo el área del triángulo formado por Yarumal, Santa Rosa y Amalfi, cuya frontera se confunde con las riberas del Bajo Cauca y con los territorios recientemente colonizados en las planicies del Cauca y el San Jorge.

El nordeste histórico fue la cuna de la provincia; las primeras fundaciones de Antioquia se hicieron allí, mas los conflictos ancestrales con una población negra y mestiza, excluida del pacto fundacional y remisa a dejarse integrar en la cultura pueblerina y campesina, llevaron al fracaso los intentos de la élite antioqueña y de los gobiernos provinciales que chocaron con la resistencia inveterada y sistemática de estos pobladores; por eso la frontera del nordeste no trasciende los límites de las cuencas altas del Nus y del Porce.

Igual cosa puede decirse del occidente: los resguardos indígenas de Cañasgordas, Murri y Sabanalarga se convirtieron en una verdadera barrera a la expansión del modelo económico y del ethos sociocultural de la élite antioqueña, que justificó sus fracasos en este campo como el resultado de la resistencia “de una raza degradada y reacia a entrar por los caminos de la civilización”; Santa Fe de Antioquia fue el centro desde donde se construyó históricamente el área circundante y su frontera se junta con la del suroeste, siguiendo el cañón del Cauca y un corredor

de poblados (Betulia, Concordia, Salgar) que como los del oriente jugaron un papel estratégico y táctico tanto en la Guerra de los Mil Días como en la violencia de los años cincuenta; corredores que no son extraños a la circulación de los grupos guerrilleros que de tiempo atrás vienen actuando en la zona.

Allende el espacio geodemográfico decimonónico y tradicional, cuyas fronteras histórico culturales marcan y definen un “adentro” integrado, cohesionado y estable, y un “afuera” excluido, cuyos referentes de identidad son esencialmente distintos y formados más que en la cultura pueblerina y campesina, en el sentido de la diferenciación impuesta desde afuera y en las prácticas sociales de la resistencia y la supervivencia.

El espacio de la exclusión no es homogéneo, en él pueden distinguirse zonas de viejo poblamiento (territorios vastos) pero de articulación débil, esporádica y coyuntural con la sociedad mayor, y espacios vacíos que no estuvieron en el orden de las prioridades de desarrollo de la sociedad decimonónica y de principios de siglo y que se colonizaron tardíamente bajo presupuestos económico políticos totalmente distintos a los del proyecto original (la colonización rapaz), e influidos también por la dinámica de la violencia y de la pacificación en los años cincuenta y sesenta, dándole un carácter estratégico militar a la construcción sociohistórica de estos territorios nuevos.

Tanto los territorios vastos como los de colonización reciente han sido tradicionalmente zonas de refugio, resistencia y supervivencia para las diferentes oleadas de excluidos que el proyecto de los antioqueños ha venido dejando por el camino.

Entre los territorios vastos cabe mencionar aquellos habitados por las etnias dominadas, resistentes al blanqueado (parte del occidente y nordeste). Las zonas circundantes al Páramo de Sonsón (suroriente) que fueron el refugio para los indígenas evadidos de los resguardos de El Peñol y de El Chuscal, para los derrotados en las guerras civiles y hasta para los curas que se rebelaron contra las leyes de *tuición* y desamortización dictadas por el general Mosquera. Y la amplia frontera chocoana, por donde circuló desde la Colonia una parte considerable del contrabando de oro y de mercancías que entraba y salía de la provincia. El resto del contrabando entró a la provincia traído de Mompo y Magangué tomando la vía fluvial del Cauca desde su desembocadura en el Magdalena para llegar al Estado de Antioquia por el territorio vasto del noroccidente.

Los espacios vastos se caracterizan por ser fronteras abiertas para la colonización espontánea, lenta pero continua, por la cual circulan pobladores trashumantes que por diferentes razones prefieren invisibilizarse, asumiendo una forma dispersa y desconcentrada de ocupación territorial; el resultado es una baja densidad, unas formas tradicionales de explotación de la tierra con las bajas productividades que esto conlleva y una débil vinculación con el mercado.

Las localidades y centros poblados en los territorios vastos, viejas aldeas o asentamientos de frontera, precarios y con escasa dinámica, no logran ser reales centros desde los cuales se controle o se dirija la comarca circundante; la red vial es escasa por decir lo menos y la dotación de servicios públicos y asistenciales de una muy baja cobertura. En algunos de estos territorios vastos (el caso del suroriente y de la frontera chocoana) aún está por definirse el estatuto jurídico de las tierras, y los habitantes han desarrollado una trama compleja de relaciones sociales en donde el Estado, así esté presente, no es el que regula las relaciones entre los ciudadanos, quienes resuelven sus requerimientos de seguridad, justicia, salud y aprendizaje a través de formas privadas, parentales y vecinales, que aquí englobamos bajo la denominación de “cultura de la resistencia y la supervivencia”.

Entre los territorios vacíos o de colonización reciente, se destacan fundamentalmente el cañón del Nus, Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Se trata de zonas que se incorporaron al espacio productivo nacional como efecto de los cambios en los modelos de desarrollo y de los nuevos rumbos que fue tomando la economía del país; estos territorios se convirtieron en estratégicos para la producción agrícola empresarial (Urabá), para la explotación de recursos naturales o derivados de ellos como el petróleo, el cemento (en el Magdalena Medio) y la energía eléctrica (en el Oriente Antioqueño) o para el enlazamiento de la red vial del país. La terminación del Ferrocarril de Antioquia permitió abrir las tierras del Nus en las primeras décadas del siglo XX; la Troncal de Occidente, las del Bajo Cauca y el Ferrocarril del Magdalena hicieron lo suyo en la formación de una nueva región en el país: el Magdalena Medio.

El “trópico antioqueño”, espacio de exclusión, entraba a la integración económica nacional bajo la égida de un modelo económico que algunos han denominado de capitalismo salvaje y bajo el signo de la violencia y el conflicto de los años cincuenta, pues en la ampliación de la frontera agrícola de Antioquia, además de factores económicos, incidió de manera importante la estrategia política militar para el mantenimiento de hegemonías políticas que se disputaban por la vía de la violencia el control territorial de la región. Por ello a este proceso bien puede denominarse como “colonización estratégica”.

Buena parte de los que llegaron a poblar estas zonas fueron los excluidos y los desplazados por la violencia en éste y en otros departamentos vecinos; la heterogeneidad sociocultural que de allí resultó es muy rica en posibilidades pero aún no logra puntos comunes de identidad o gestar nuevos sentidos de pertenencia. Además, el poblamiento se realizó sin la presencia activa del Estado y, contrario al proyecto mercantil decimonónico, este careció de dimensiones ético culturales; de allí que la violencia y el conflicto fuesen ejes de primer orden en la constitución histórica de los espacios recientemente colonizados.

No es por casualidad entonces que fuese en la frontera histórica y en los territorios de exclusión donde se desarrollaron las formas más agudas de violencia durante los años cincuenta; donde los grupos alternativos al bipartidismo han tenido una influencia mayor o que sean éstos los territorios controlados hoy por los contrapoderes (las guerrillas), los parapoderes (autodefensas y paramilitares), así como por el narcotráfico y el narcoterrorismo con su propuesta de ausencia de poder.

### La crisis del proyecto de la élite antioqueña

El proyecto de la élite antioqueña operó eficientemente mientras mantuvo su vigencia el modelo mercantil especulativo, la cultura pueblerina y campesina, y los dispositivos locales de poder. Mas los procesos de la modernización como la industrialización que tuvo en Medellín su asiento principal, la urbanización, la metropolización del Valle del Aburrá y un nuevo diseño vial de corte radial, mediante el cual se vincularon por carretera las cabeceras municipales con el centro urbano, unido a la aparición de las masas en el escenario de la vida económica y política con sus organizaciones propias como los sindicatos, los gremios, las asociaciones civiles y los nuevos partidos de orientación clasista, erosionaron las bases constitutivas del viejo modelo, cambiaron los referentes concretos sobre los cuales se sustentó y se reprodujo tanto el ethos social del pueblo antioqueño como las culturas pueblerinas y campesinas, y se precipitó en Antioquia (también en otros lugares del país) una típica crisis de legitimidad, asociada con factores de cambio acelerado y de crecimiento económico, que afectó tanto la territorialidad histórica tradicional como a las zonas de exclusión, aunque de diferente manera y con distintos ritmos y tiempos.

Los procesos de la modernidad no irrumpían como relámpago en cielo sereno durante la coyuntura del medio siglo XX (1930-1960), pero fue en ese período cuando se hicieron evidentes sus impactos, sus desajustes, sus cambios y transformaciones, revelando a su vez la existencia de esa Antioquia relegada e innombrada que empezó a hacerse visible por la multiplicidad de los conflictos que estallaron en esos tiempos, así como se hacían públicas las demandas de las masas que empezaban a reclamar sus derechos, autonomizándose de las viejas lealtades partidistas de los años anteriores.

Esta crisis típica de crecimiento afectó en primer lugar la tranquila y pacífica villa de los mercaderes de Medellín, transformando los bellos paisajes del Valle del Aburrá en un mundo de cemento cruzado de vías rápidas, de zonas fabriles, de barrios nuevos que se extendían por la ribera occidental de un río que empezó a morir y a volverse oscuro; de pobladores recién llegados del campo que tuvieron que improvisarse como obreros y como ciudadanos; de asentamientos periféricos sin servicios ni recursos que se pegaban a las laderas erosionadas de Medellín como

forma de supervivencia en un medio desconocido y hostil que diferenció estos pobladores, los ignoró, excluyéndolos del derecho a la ciudad.

Invasores de tierras, proletarios, rebuscadores, sectores medios, profesionales y élites pueblerinas venidas a menos, fueron configurando una trama urbana de relaciones cruzadas por conflictos y desajustes que carecía de referentes nuevos de identidad y que buscaba otros canales para expresar sus demandas en el espacio de lo público.

A más del tránsito de la ciudad decimonónica hacia la metrópoli moderna que concentró en el Valle del Aburrá más de la mitad de la población del departamento, la vieja territorialidad sociohistórica antioqueña también se vio fuertemente afectada, en tanto que el nuevo proyecto industrial subordinó las localidades a la dinámica del centro, cambiando los ejes de desarrollo y articulando-desarticulando diferencialmente los espacios territoriales de la región.

Así los pueblos de la zona central, antes vitales y dinámicos, empezaron a decaer, a perder influencia en sus zonas cercanas y también representación política en las altas esferas de los poderes públicos.

La atracción de migrantes y de capitales que buscaban economías de escala, la centralización de la inversión pública, la preocupación estatal y también privada para responder a las demandas de la urbanización incontrolada, la desaparición de los bancos regionales centralizando esta importante actividad en Medellín, el nuevo esquema de distribución de mercancías que trajo aparejado el modelo industrial, centrado en agencias y no en los viejos comerciantes pueblerinos y en sus redes de lealtades y solidaridades, cambiaron el diseño multicéntrico de la territorialidad histórica por un sistema concéntrico en el cual la macrocefalia urbana terminó por absorber, por subsumir y controlar la rica vida pueblerina y campesina; por llevar a la decadencia las élites locales y comerciales y por la conversión en "periferia" del espacio geodemográfico que se extendía más allá del Valle del Aburrá.

Por primera vez en muchos años, los paralelos y los meridianos del desarrollo antioqueño dejaron de pasar por la territorialidad sociohistórica, mientras que algunas de las regiones excluidas se convertían en objeto de la inversión privada y en la preocupación del nuevo modelo exportador y de transporte (Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio).

Las transformaciones multidireccionales de la modernización fracturaron y descompusieron los referentes concretos en los cuales se anudó y se reprodujo la cultura pueblerina y campesina; rompieron las viejas redes mercantiles, parentales, vecinales y las sociedades de negocios, llevándose de la calle los dispositivos de poder desde los cuales se había manejado con tanta eficiencia el control social y la dirección de la vida política, dejando en manos del Estado, que crecía y se

llenaba de nuevas funciones, la responsabilidad del ordenamiento social y del mantenimiento de las identidades colectivas.

En este contexto de cambios rápidos y transformaciones radicales donde, como dice Marshall Berman de la modernidad, "todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado es profanado", los viejos valores y tradiciones de la familia antioqueña dejaron de tener fundamentos concretos en la vida colectivamente vivida y pasaron a formar parte de lo imaginario, del mito, de la leyenda, perdiendo la capacidad de generar y reproducir identidades colectivas sobre las cuales las representaciones simbólicas (el Estado, la ley, la norma) pudiesen operar.

La crisis de crecimiento que vivió la región, más temprano y más rápido que en otros lugares del país, se manifestó a través de situaciones de conflicto, de tensiones sociales que no siempre se resolvieron por canales institucionales, de desbordamiento de las masas que tomaron formas violentas de expresión y que se controlaron también violentamente por parte de las autoridades, pues este tipo de crisis siempre produce fisuras y fracturas en la dura caparazón de las sociedades, poniendo de manifiesto que tras esa superficie tan sólida en apariencia existen corrientes subterráneas y abismos profundos que están develando la obsolescencia del viejo orden. En Antioquia esta crisis hizo visible lo invisible e hizo público lo que había estado oculto, precipitando formas de deslegitimidad a las cuales era necesario salirles al paso.

Las crisis de crecimiento, así sean deslegitimantes, no son algo patológico, dañino o ajeno al devenir de las sociedades; por el contrario, el conflicto y las divergencias acompañan el desarrollo de cualquier sociedad. Por ello el problema no es la crisis en sí, sino la carencia de alternativas para enfrentarla o que las propuestas ofrecidas no logren convocar el consenso activo y carezcan por lo tanto de legitimidad. La última situación descrita es la que corresponde a la realidad colombiana y más particularmente a la antioqueña, cuyo proyecto político y ético cultural había tenido una vigencia y una estabilidad más que centenaria.

Esta crisis de crecimiento, dejada a su propio devenir, entró en un período de aceleración y se precipitó la violencia desagregada, informe y generalizada; coyuntura a la que tanto la tradición popular como los estudiosos del fenómeno han denominado "la Violencia con mayúscula", quizá para diferenciarla de violencias más minúsculas que por su ámbito, su dimensión o su lejanía en el tiempo se ven más pequeñas, pero que recogen un hilo perviviente de la historia colombiana donde este fenómeno no ha sido lo excepcional sino más bien la constante.

En Antioquia, como en el resto del país, la violencia se manifestó con un matiz partidista, lo que era explicable pues los partidos tradicionales, sus guerras, sus luchas, sus banderas, sus odios y su sectarismo, habían sido los únicos elementos de identidad nacional, los referentes que les permitieron a los habitantes de dife-

rentes lugares del país tener alguna noción de pertenencia a un espacio institucional más amplio que su localidad o su región. El espacio de lo público nacional estaba acotado por los partidos. Por ello la expresión de la crisis fue esencialmente política; con este manto se cubrieron otros conflictos y desajustes; la política partidista les prestó color y sabor a sucesos que desbordaban con mucho la lucha encarnizada por el poder en el Estado.

Este manto opacó y encubrió por ejemplo conflictos agrarios y de lucha por la tierra, sobre todo en aquellas zonas hacia las cuales se dirigía el interés de los inversionistas o que se valorizaban por la construcción de obras públicas; buena parte de la violencia vivida en Urabá, en el cañón del Nus y en Urrao tenía este perfil agrarista.

Conflictos de carácter clasista entre los viejos poderes regionales y los nuevos grupos alternativos: comunistas, gaitanistas y "nueve abrileros"; el Nordeste, Puerto Berrío, Cauca y los viejos barrios obreros de Medellín (Manrique y Aranjuez) fueron escenarios de esta forma de violencia.

Tensiones de dimensión económico corporativa con sectores obreros o asalariados que habían protagonizado fuertes huelgas en los años anteriores y por eso se los consideraba potencialmente peligrosos, como el sindicato de choferes o los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia. También divergencias de ámbito privado (parentales o vecinales) que a la sombra de la violencia generalizada se definían por la liquidación del contrario.

Muchas de estas situaciones violentas no pasaron por la adscripción política de los contendores o de la posición de víctimas y victimarios, que con más frecuencia de la que se acepta podían pertenecer al mismo partido; en otras ocasiones, gentes de ambas colectividades se coligaron o bien para liquidar un enemigo común o bien para defender su localidad y su comarca de los estragos que sus copartidarios agenciaban desde fuera; desde la administración, los cuarteles o las diócesis.

Esta coyuntura de la aceleración de la violencia puso en evidencia que detrás de esa caparazón aparentemente sólida de un Estado centralizado, unitario e institucionalizado, se escondía la fragmentación del poder y se puso de manifiesto la pérdida de control y dirección que pudiese tener el gobierno en sus diferentes niveles y contextos, así como la debilidad del Estado y de la sociedad civil que en la práctica se correspondía con una sumatoria de poderes en armas y con una yuxtaposición de territorios controlados por fuerzas encontradas.

Antes que una defensa o un ataque en el espacio político del Estado, la estrategia se orientó más hacia el control estratégico de territorios, bien para establecer corredores de circulación que vinculasen espacios separados pero controlados por un mismo partido, bien para impedirlo, creando núcleos de resistencia estratégica.

Estos territorios controlados por uno u otro de los sectores en lucha, "las chusmas y las contrachusmas" como se los llamó en la época, se convirtieron en lugares de refugio para pobladores excluidos o afectados por la multiplicidad de los conflictos desatados en esa coyuntura que buscaban, más que la protección del Estado, la "seguridad" que podían brindarles los dueños del poder en el territorio, acogiéndose a una u otra bandera, a uno u otro poder de acuerdo con su identidad partidista.

La estrategia de control territorial orientó a las corrientes migratorias que se dirigían a las zonas de nueva colonización, marcándole un carácter político militar y profundamente violento a la ocupación socioeconómica de estas áreas; a esa lógica corresponde la fundación de poblados tan importantes como Puerto Triunfo y Puerto Boyacá, situados a uno y otro lado del río Magdalena pero adscritos a banderas políticas distintas.

### Las alternativas para superar la crisis de crecimiento

Las crisis de crecimiento y su fase aguda de deslegitimaciones históricas expresada durante los años de la violencia, planteaba la necesidad de formular nuevos proyectos políticos y ético culturales acordes con los "signos de los tiempos", que le marcasen nuevos rumbos al conglomerado social y que permitiesen dirigir sobre bases sólidas el futuro de la región y de la nación. Sin embargo, las alternativas para conjurar las crisis, tanto de las viejas élites como de los grupos que habían surgido en el contexto de las transformaciones sociales del período, fueron parciales, unilaterales, restringidas y además marcadas por lo regional en un país que empezaba a volverse nacional.

Las alternativas de solución a la crisis, surgidas en la segunda mitad del siglo XX, no constituyen un proyecto político orgánico; han sido sólo propuestas aisladas, inorgánicas, desagregadas, territorializadas. A su vez, las acciones concretas no responden a las formulaciones programáticas; pero lo que constituye el factor deslegitimante más agobiador es que ninguna de las propuestas, las de las élites tradicionales o las de los grupos alternativos, han logrado concitar el consenso activo de los ciudadanos, el apoyo consciente y decidido de grupos amplios de población. Las carencias de consenso se cubren con la fuerza y la violencia, y una crisis de crecimiento no resuelta, congelada, postergada o librada a su propio devenir, cambia de signo para convertirse en una crisis de descomposición que termina disolviéndose y desagregando no sólo la institucionalidad sino todo el tejido social.

La crisis inducida por procesos de cambio acelerado planteaba una serie de demandas y retos sociales que pueden sintetizarse de manera gruesa en tres puntos.

### En el escenario económico

Se requería modernizar viejas estructuras productivas para reinscribir los desplazados del campo en la esfera industrial y de los servicios, modernizar los sistemas agrícolas atrasados, empezando por la estructura y las formas de tenencia de la tierra; desarrollar políticas sociales tanto para responder a los nuevos requerimientos de los sistemas productivos como para aminorar el impacto de los traumas del crecimiento sobre los nuevos pobladores urbanos y sobre los habitantes de la ruralidad; reformas agrarias, laborales, administrativas, urbanas, que aún espera la sociedad colombiana y la región en particular. No obstante, en este escenario (el económico) es en el que se han movido la mayor parte de las iniciativas gubernamentales y privadas para conjurar la crisis; en otras palabras, la única dimensión de la sociedad en la que se han desarrollado transformaciones modernizadoras más o menos importantes y éste es el espacio en el cual las propuestas políticas agenciadas desde el Estado han logrado los mayores éxitos.

La élite empresarial de Antioquia puede catalogarse como modernizante. Fue capaz de cambiar su modelo mercantil especulativo por el industrial, adecuar la infraestructura vial y de comunicaciones a las exigencias de esta actividad productiva, transformar la vieja Villa de Medellín en una metrópoli, desarrollar sistemas de energía eléctrica y de servicios públicos eficientes y modernos, iniciar la "conquista del trópico antioqueño" con el cultivo industrial del banano y la ganadería intensiva. Pero este modelo, más técnico económico que político, no contempló una dimensión social que articulase las masas al proyecto industrial, aspecto que sí contempló el proyecto mercantil decimonónico y donde radica buena parte de su éxito, de la legitimidad que concitó y de los referentes identificatorios que logró colectivizar.

El modelo industrial sustitutivo fue más cerrado, más monopólico y más inaccesible al ciudadano corriente; el horizonte de la acumulación dejaba de estar abierto para los más hábiles, los más capaces y los más arriesgados. Estos requisitos tenían que estar asociados ahora con el dinero para poder entrar al mundo de la acumulación. Sin embargo, el imaginario del ethos sociocultural seguía funcionando y se reproducían "mentalidades empresariales" que no tenían espacio para concretarse en el mundo económico. El acelerado desarrollo del narcotráfico en Antioquia quizá se haya lucrado de este exceso de "mentalidad empresarial instalada" y de una trama de relaciones que, como la mercantil especulativa decimonónica, está abierta para quienes asuman riesgos y situaciones potencialmente peligrosas.

Los cierres del modelo económico, unidos a la carencia de propuestas reformistas, trajo como consecuencia la aparición de fenómenos como el desempleo y la pobreza absoluta, que también existían antes pero que ahora se hacían visibles entrando en el terreno de lo público y reclamando, a veces por la fuerza, respues-

tas a sus carencias recientes pero también a sus ancestrales demandas.

En suma, el carácter estrictamente técnico económico asumido por la élite empresarial, la aisló de los otros sectores sociales, le hizo perder los anclajes en el conglomerado social, dejó de ser referente de identidad para los hombres del común y para los jóvenes que ya no veían en ellos modelos para imitar sino enemigos para combatir.

En realidad la modernización y la industrialización en todas partes del mundo conllevan fenómenos semejantes; el problema no está allí. Los efectos fracturantes y disgregadores en los cuales se anudan factores muy complejos de violencia, apuntan hacia otro lugar: la unilateralidad de la propuesta económica que no tuvo correlato en el espacio político y en el ético cultural, con la consecuente pérdida para la élite de capacidad de dirección política que es también pérdida de poder y por tanto de legitimidad.

### El escenario político

Este era, si se quiere, el espacio en el cual se requerían las mayores transformaciones una vez descompuestas las viejas redes de solidaridades y lealtades, disgregados los dispositivos de poder y de control social y desligados los partidos de la trama fragmentada donde se sustentaban; se requería fortalecer la sociedad civil de corte nacional para que se adecuase a las grandes transformaciones económicas del período, propiciar nuevas formas políticas y corporativas de encuadramiento que respondiesen a las condiciones en que las masas desarrollaban su quehacer económico y su vida material, lo que implicaba el pluripartidismo y el fortalecimiento de asociaciones económicas corporativas autónomas, así como una real modernización del aparato estatal.

Las alternativas de respuesta en este campo fueron múltiples, se movieron a la luz de las necesidades de cada momento, detrás de los acontecimientos, desbordados por ellos, sancionando hechos cumplidos sin que pudiese verse una dirección, un rumbo definido en el ejercicio político del Estado, en la conducción de los sectores dominantes (que habían dejado de ser dirigentes) o en las respuestas meramente contestatarias y armadas de los grupos alternativos.

Las propuestas de salida a la crisis y a la violencia combinaron la paz y la guerra, el indulto y la contrainsurgencia, la militarización y los pactos políticos, la dictadura y la democracia. El escenario de lo político tuvo diversos y muy complejos actores que se movieron por él sin libreto previo y sin ninguna dirección. La enunciación apretada de las alternativas más destacadas lo pueden demostrar.

**La dictadura militar.** Estrategia mediante la cual se apeló a la tercería de las fuerzas armadas como una manera de buscar nuevos consensos entre los partidos en un espacio supuestamente neutral; dictadura que, contrario a lo que ocurría por

el mismo tiempo en otros países latinoamericanos, no se producía como una alternativa de poder venida de los militares sino como una "solución límite", como una medida de fuerza adoptada por los sectores políticos, inducida por ellos y revocada cuando consideraron que este tratamiento de choque se había vuelto disfuncional. La élite empresarial de Antioquia jugó un papel protagónico en este evento, así como en la negociación que llevó al Frente Nacional.

**El indulto y la rehabilitación.** Estrategia orientada hacia los alzados en armas que fue diferencialmente acogida por los grupos violentos en el país y con desiguales resultados en las regiones, pero que en Antioquia tuvo un desarrollo particular especialmente con las guerrillas del Capitán Franco en Urrao, las más orgánicas y cohesionadas en el territorio regional, que se acogieron al indulto y algunos de sus miembros pasaron a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en la políticas de la pacificación; otros, por el contrario, resultaron víctimas del mismo proceso y no tuvieron la posibilidad de reincorporarse a la vida civil. Tanto el indulto como la rehabilitación se pusieron en marcha por la dictadura militar y por el primer gobierno del Frente Nacional.

**La pacificación.** Estrategia acogida por el gobierno militar y por los dos primeros cuatrienios del Frente Nacional, tuvo como objeto terminar con el bandolerismo supuestamente residual que dejó este período crítico y también con los grupos que no se acogieron al indulto y que empezaron a plantear propuestas agraristas, clasistas y autonomizadas de los partidos tradicionales (allí está el origen de las Farc). En Antioquia, algunas de las personas que venían actuando en las guerrillas liberales del nordeste se acogieron a la sombra protectora de las llamadas repúblicas independientes de Marquetalia y Río Chiquito, en el piedemonte cundinamarqués, pero más a título individual que como organización propiamente dicha.

La pacificación consistió en la aplicación de la fuerza pública, apoyada en sectores campesinos (autodefensas) y en viejos combatientes amnistiados, para liquidar los reductos de bandolerismo. Al amparo de esta propuesta se dictó la Ley 48 de 1968 por la cual se legalizaron las autodefensas en el país, derogada hace apenas poco tiempo por el gobierno del doctor Virgilio Barco.

La "violencia tardía", ocurrida en la década de los años sesenta, es la forma eufemística de nombrar una violencia oficial que involucró las organizaciones campesinas en la lucha contrainsurgente. "La época en que aquí decretaron la pena de muerte contra los bandoleros" es la manera como los campesinos del suroriente antioqueño nombran este período oscuro de la historia nacional.

Esta política de pacificación se desarrolló con fuerza en Antioquia, sobre todo en los territorios vastos y en los espacios de reciente colonización; es decir, en las áreas históricas de exclusión que volvieron a operar como refugio de los que tenían cuentas pendientes con la justicia. La forma como el gobierno "hizo pie" en

los territorios excluidos de Antioquia fue a través de la fuerza armada, el Estado como pura potencia, que carecía de formas democráticas y de derecho y que estaba lejos de prácticas asistencialistas o benefactoras que por el mismo tiempo se llevaban a cabo en las zonas urbanas del departamento.

En Antioquia, contrario a lo que ocurrió en otras regiones del país (El Huila, El Tolima, El Caquetá, el piedemonte llanero), las guerrillas de los años cincuenta no dejaron semillas que evolucionaran hacia la formación de la actual insurgencia. Los frentes guerrilleros del presente se desarrollaron posteriormente y a la luz de propuestas inscritas en la dinámica de los contrapoderes de clase; pero la contrainsurgencia y la pacificación sí marcaron con huellas profundas las prácticas sociopolíticas de los pobladores de las zonas donde esas propuestas se pusieron en ejecución. Prácticas y mentalidades alimentadas también por una escasa presencia del Estado y, más que eso, por la dimensión predominantemente violenta que el ejercicio político ha tenido, cuyo necesario correlato es la dificultad en la constitución de nuevas identidades y la escasa operatividad de los sistemas simbólicos de representación.

No es de extrañar entonces que la localización de los parapoderes en Antioquia (autodefensas y paramilitares) coincida con aquellos lugares donde la política de la pacificación tuvo un mayor desarrollo.

Existe pues un hilo de continuidad entre la contrainsurgencia de los sesenta y el paramilitarismo de los ochenta; cosa que no ocurre con los movimientos guerrilleros de antes y de hoy, que si bien territorialmente coinciden, no así en sus propuestas, en sus estrategias, sus tácticas, sus orígenes y sus adscripciones ideológicas.

**El Frente Nacional** o la estrategia de pacto "inter pares" para recuperar el poder institucional y legitimar el régimen. Los analistas de los fenómenos políticos colombianos, con contadas excepciones, le otorgan al Frente Nacional un lugar especial en la explicación de los fenómenos de violencia de reciente data, en el surgimiento de las agrupaciones guerrilleras, en el cierre de los espacios políticos, en la militarización de la vida civil, en la crisis de los partidos políticos y en la lenta desinstitucionalización del aparato estatal. Esto es sólo parcialmente cierto, pues la propuesta del Frente Nacional no estuvo sola en el escenario de la política ni fue ésta la única alternativa de salida ofrecida a la crisis de crecimiento que desembocó en la violencia.

Más que el Frente Nacional "per se", lo que no permitió encontrar horizontes firmes para superar la crisis fue la pluralidad contrastante en las alternativas puestas en ejecución, las contradicciones, las incoherencias, donde los hechos cumplidos marcaban la pauta de acción del Estado y la política, lejos de ser guías para la conducción de una colectividad atravesada por el conflicto, fueron medidas tomadas por la presión de los acontecimientos. Lo político y lo violento, lo civil y lo

militar se imbricaron, se fusionaron y se confundieron, perdiéndose las distancias, esfumándose las diferencias, haciendo de la política una práctica violenta y de la violencia una manifestación de lo político, lo que es válido tanto para la acción del gobierno como para el ejercicio de los alzados en armas.

Las restricciones políticas frente-nacionalistas no consisten únicamente en su carácter bipartidista o en la concentración del poder en pocas manos, sino más bien en que el pacto se realizó en el espacio geodemográfico de la sociedad mayor, en el territorio acotado por los partidos, que está lejos de cubrir la nación o la región más ancha y más ajena que la que se sancionó con el Plebiscito de 1957.

El pacto político se circunscribió a las viejas fronteras histórico-culturales, excluyendo vastos territorios y sectores sociales que quedaron librados a sus propias fuerzas. Las manifestaciones violentas que allí se presentan hay que verlas también como una forma de lucha por el derecho a la nación.

El cierre del sistema bipartidista no fue tan absoluto como algunos lo miran; de hecho, estas colectividades no son aparatos orgánicos con jerarquías rígidas. Por el contrario, han sido agrupaciones laxas, de fronteras abiertas y desdibujadas, donde se multiplican las fracciones, las jefaturas, las tendencias y las alternativas electorales; estas disidencias y grupos abrían posibilidades para las manifestaciones posicionistas y es bien interesante constatar cómo el mapa electoral de Antioquia muestra que la mayor acogida de "lo no convencional" también estuvo enmarcada por las fronteras histórico-culturales y los espacios excluidos: el Gaitanismo, la Anapo, el MRL, así como las agrupaciones legales de la izquierda que se expresaron electoralmente después de terminada "la alternación y la paridad", tuvieron el mayor número de adherentes precisamente en estos espacios de la exclusión.

En el escenario de lo político se careció de un verdadero proyecto para enfrentar la crisis de crecimiento y sus consecuencias violentas y desestabilizantes, tanto por parte de las élites que quisieron prolongar en el tiempo un viejo modelo político cultural que ya no se correspondía con las demandas que desde la economía se le hacía al poder y a la política, como por parte de los grupos alternativos legales o armados; los primeros no pudieron convertirse en tercería y los segundos acogieron una propuesta de "toma del poder" de corte vanguardista e inorgánico con relación a las masas populares que se separaban de sus partidos tradicionales pero que no se sentían identificadas con los grupos guerrilleros que decían representarlas.

### **El escenario de lo ético cultural**

Sin verdaderos proyectos políticos, el escenario de lo ético cultural quedó vacío, o para ser más precisos, se mantuvo el mismo decorado heredado del siglo XIX. Se pensó que el viejo ethos sociocultural sustentado en el trabajo productor de riqueza, en la familia como paradigma del orden social, en la moralidad pública y

en la palabra empeñada, debían seguir siendo referentes de identidad en un medio social donde las viejas redes articuladoras se habían disuelto para dar paso a la formación de masas predominantemente urbanas, que desarrollaban su vida en contextos modernizantes aunque no modernistas, dejadas a su propia suerte y a imaginar formas alternativas e informalizadas para sobrevivir bajo la égida de una exclusión de nuevo signo.

El ethos social y las culturas pueblerinas, claves del éxito y de la vigencia histórica del viejo proyecto decimonónico, dejaban de estar arraigadas en la vida colectivamente vivida para convertirse en discurso, en simple enunciación retórica que poco le decían al desempleado urbano, al campesino de las zonas de violencia, al que buscaba refugio en los territorios excluidos donde el viejo proyecto nunca había funcionado, en fin, a esa masa compleja y contradictoria que exigía una nueva ética predominantemente civil y ciudadana y referentes modernos de identidad que no podían ser otros que los de la nacionalidad y la democracia pluralista, incluyente y participativa. La élite industrial antioqueña, tan modernizante en los aspectos técnico económicos e infraestructurales, fue tremendamente conservadurista en las otras dimensiones de la vida social y mantuvo, esta vez sin ningún éxito, el viejo esquema valorativo y los tradicionales mecanismos del control social.

La élite empresarial, a través de la pastoral social de la iglesia y de algunas asociaciones piadosas, intentó reproducir en el espacio urbano industrial los mismos mecanismos de control de la vieja sociedad. Por los años cuarenta y cincuenta se desarrollaron campañas de "moralidad pública" contra el alcoholismo y el juego, orientadas especialmente a los obreros; contra las "malas costumbres", por la decencia y el pudor en la mujer, por la protección de la familia cristiana y contra la prostitución y el vicio. Se utilizaron también los mecanismos parentales y las recomendaciones de los curas párrocos para el enganche de trabajadores en las textileras y la iglesia institucional pasó a jugar un papel importante en la fundación de sindicatos católicos (la UTC) y de otras organizaciones de igual importancia, como las acciones comunales un poco más tarde.

Los viejos valores antioqueños, desarraigados de sus contextos reales, desarticulados del viejo proyecto que les dio sentido, operan sólo parcial y desagregadamente en la formación de identidades sociales, y en lugar de constituirse en factores estructurantes del conglomerado social, más bien cumplen funciones de desestructuración. ¿Qué pensar entonces de las prácticas sociales de narcotraficantes y sicarios que reivindican para su quehacer las manifestaciones externas de la religiosidad tradicional, el trabajo orientado hacia fines útiles y de enriquecimiento, el valor de la familia, el amor a la madre y la asunción del riesgo, la aventura y el arrojo?

La clave de la hondura de la crisis antioqueña puede estar en parte allí: la desaparición de un proyecto político y ético cultural de gran solidez, pervivencia histórica y profundo calado en la mentalidad de los antioqueños, que no fue reemplazado, intentando por el contrario mantener a ultranza modelos políticos, referentes de identidad y esquemas valorativos desbordados por la historia que han contribuido a la postergación de la modernidad y a la descomposición del tejido social. La propuesta de "recuperar los valores de Antioquia" va pues en contravía de cualquier posible solución a la crisis actual.

## Las fracturas del poder

### Hacia una crisis de descomposición

**El escenario de lo nacional: Los contrapoderes y los parapoderes.** Los profundos cambios socioeconómicos y su desenlace trágico de la violencia y la pacificación, así como la ausencia de proyectos orgánicos realmente convocantes a que dio lugar, trajo aparejado el fenómeno de la nacionalización de los espacios del conflicto. La polarización político-militar planteada en Colombia desde finales de la década del sesenta por la aparición de los movimientos guerrilleros en diferentes territorios, con diferentes adscripciones ideológicas, creaban un escenario que si bien tenía expresiones regionales, sus manifestaciones armadas involucraban la vida de todo el país y convocaba respuestas también nacionales en tanto que lo que se ponía en cuestión era la existencia misma del Estado.

La formación de los contrapoderes armados, cuya estrategia se orientaba hacia "la destrucción del Estado burgués" y la toma del poder por las armas, nacionalizó el conflicto y Antioquia se convirtió en un escenario, entre otros, de un enfrentamiento militar cuyos motivos y razones no se gestaban solamente en el departamento ni tampoco la manera de enfrentarlos; las acciones a este respecto se tomaban por el gobierno nacional y más específicamente por los altos mandos del ejército.

Este conflicto armado, desde sus inicios, salió de la esfera de lo meramente regional. Así, problemas de diferente orden sucedidos en diferentes lugares del país o en departamentos cercanos, terminaban afectando a Antioquia y las situaciones de hecho creadas por la guerrilla eran manejadas exclusivamente por los mandos militares, cuyas ejecutorias en pro del establecimiento del orden público afectaron también, y de manera grave, la vida de la región.

En lo que a los contrapoderes se refiere, Antioquia es sólo un escenario, entre otros, de la confrontación nacional y la única agrupación guerrillera de las que actúan en el país que puede tener algún origen regional es el EPL; las otras, surgidas en lugares distintos de Colombia, han llegado al territorio paisa por motivos estratégico-militares: la búsqueda de tradicionales zonas de exclusión y de refugio

primero y la localización de actividades claves en la economía nacional después.

Hoy, salvo el Quintín Lame, todas las agrupaciones guerrilleras actúan en territorio antioqueño y cada una posee varios frentes que no siempre operan coordinadamente. Se trata más bien de poderes dispersos que fracturan y diferencian la región antioqueña, formando territorialidades que involucran espacios de varios departamentos, poniendo de manifiesto la existencia de una geografía del conflicto a través de la cual aparece otra nación excluida, alternativa, yuxtapuesta y confrontada con el espacio geodemográfico acotado por el bipartidismo.

Si bien la dinámica de los contrapoderes es de corte nacional, no pueden desconocerse las particularidades regionales que de alguna manera han facilitado tanto la localización de los frentes guerrilleros como el apoyo y la identificación que sectores poblacionales y sociales les han brindado a estas agrupaciones. Observando el mapa de los conflictos y la violencia en Antioquia puede verse cómo los territorios controlados por los contrapoderes coinciden con los espacios de la exclusión y con las fronteras histórico culturales de Antioquia.

Los contrapoderes ocupan los espacios vastos (la frontera chocoana, la vertiente del oriente hacia el río Magdalena y partes del Occidente y el Nordeste); territorios recientemente incorporados a la vida socioeconómica de la región bajo el signo de la colonización estratégica (Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio); zonas de vieja tradición de lucha por la tierra (el Nus y parte del Nordeste) y poblaciones históricamente conflictivas donde la dinámica de lo local se articula o se sobrepone con el conflicto nacional.

Ahora, como antes, a estos territorios dominados por los contrapoderes, se los mira como el espacio de "los otros", de los enemigos; como problemas de orden público, y la estrategia ha consistido en someterlos por la fuerza de las armas, como si todos los habitantes fuesen guerrilleros o como si toda propuesta social fuese comunista, desconociendo así no sólo un cúmulo de carencias ancestrales sino también los nuevos procesos políticos e identitarios que ya no caben en los estrechos márgenes de la vieja región y de la vieja nación.

El fracaso de táctica militar para derrotar los contrapoderes, el avance de éstos hacia los espacios territoriales de la vieja Antioquia, unido a factores de descomposición social como el secuestro y la extorsión, propiciaron la formación de parapoderes en distintos lugares del país. Los grupos paramilitares y de autodefensa campesina, algunos de ellos organizados por las fuerzas del orden o los poderes locales, otros fundados por el narcotráfico y los menos autónomos e independientes, condujeron no sólo a la polarización de los conflictos sino a fracturar aún más el territorio de la región.

Los parapoderes, como los contrapoderes, obedecen a dinámicas de corte nacional y a factores que desbordan nuestros conflictos domésticos. Las más fuer-

tes de estas agrupaciones no tienen su sede en territorio antioqueño (Puerto Boyacá, la ribera oriental del río Magdalena o la zona cordobesa limítrofe con Urabá), pero actúan sobre las territorialidades del conflicto en la región y se anudan de manera diferente y desigual con los poderes locales de algunos municipios, con narcotraficantes o con grupos de campesinos y propietarios cansados con los abusos de la guerrilla y con la ineficiencia de las autoridades.

Los parapoderes, antes que una estrategia efectiva en la recuperación del control territorial para las fuerzas institucionales, es decir, antes que un reforzamiento del Estado, han conducido a la formación de espacios en los cuales estas agrupaciones dictan "su ley" e imponen su poder, incluso contra las autoridades civiles que representan la institucionalidad del Estado en las zonas por ellos controladas. El resultado es una yuxtaposición de territorios controlados por los parapoderes, que definen su dominio por medio del asesinato selectivo de opositores y en el nuevo escenario de las masacres.

**El escenario de lo regional.** La dinámica de los contrapoderes y los parapoderes de corte nacional e intensificada en las últimas dos décadas de la vida colombiana, se combinó con situaciones socioeconómicas y políticas de orden regional ocurridas por la misma época, cuya incidencia no se ha calibrado suficientemente pero que están en la raíz de la actual crisis de descomposición por la que atraviesa el departamento. Ellas son el relevo de élites políticas y el estancamiento del modelo industrial sustitutivo.

La vieja élite industrial antioqueña, cuyos ancestros familiares se remontan hasta los grandes comerciantes y banqueros decimonónicos, empezó a "perder pie" en la conducción de la vida regional cuando persistió en su intento de mantener a ultranza el viejo modelo ético cultural de sus mayores, cuando dejaron de ser referentes de identidad y modelos para imitar y cuando la fractura de las viejas tramas sociales los desligó de los lazos parentales y las viejas lealtades sociales y partidistas, en las cuales se fundamentaba su capacidad de dirección.

La parábola de su desconexión con las masas se completó cuando esta vieja élite industrial salió del escenario político partidista y empezó a ser reemplazada por una capa nueva, surgida de la modernización de la vida social, formada por profesionales de origen pueblerino y ligados con la administración pública y con las nuevas funciones que el Estado empezaba a asumir en el contexto del Frente Nacional.

Los representantes de esta nueva capa pasaron a ser los jefes de los directorios políticos, los gobernadores, los ministros, los parlamentarios, insertándose en ese inmenso campo del Estado que les posibilitaba el manejo de muchos recursos para conquistarse el favor electoral de las masas. El nuevo esquema de relación política con las gentes del común no pasaba ya por las viejas lealtades con el par-

tido, sino más bien por un sistema de intercambio de recursos públicos, servicios personales y acceso a los beneficios del Estado, por apoyo político y respaldo electoral.

Para finales de la década de los años setenta, esta nueva capa manejaba ya la vida política institucional del departamento, sin que este relevo de élites significase cambios ideológicos y programáticos de ninguna clase, pero sí un fraccionamiento de los partidos representado en jefaturas y "parcelas" autónomas y desligadas de las direcciones centrales. El cambio de viejas élites es por lo general un cambio más positivo que negativo, el problema no está pues allí; tampoco en que la primera élite fuese "mejor" que la segunda o que ésta utilizase métodos menos ortodoxos y moralistas. La vieja élite no fue tampoco un dechado de virtudes; la diferencia está en que la primera fue una clase orgánica, tuvo mayor legitimidad, contó con más poder, en tanto que la segunda es más inorgánica, no ha podido ser factor estructurante del orden social y su poder deviene del manejo que para su beneficio hacen de los recursos del Estado, lo que les resta indudablemente arraigo social y legitimidad políticas.

Sacada del escenario político electoral y de la conducción de la gestión administrativa y representativa en el Estado, la élite industrial abandona poco a poco el escenario de la vida económica regional en donde por muchos años tuvo una gestión exitosa.

El relativo estancamiento en la actividad productiva de Antioquia, que empezó a mostrar síntomas alarmantes en la mitad de la década de los setenta, le restó capacidad de incidir en la vida nacional, a la par que grupos empresariales de otros departamentos y regiones ganaban presencia y protagonismo. Pero los golpes más definitivos se expresaron a través de la crisis de las textileras, que era la crisis de todo un modelo económico, y la crisis de las financieras en los años ochenta, que se llevó de calle muchas fortunas amasadas durante varias décadas y los ahorros de sectores medios y pequeño burgueses que confiaron en la capacidad de gestión de un grupo empresarial que había mostrado su solidez durante muchísimos años, tantos como la memoria individual alcanzaba a recordarlo.

Estas crisis, además de sus efectos en los indicadores macroeconómicos, lesionó de manera grave los sectores obreros y los habitantes de los viejos barrios de trabajadores en Medellín, que vieron más de cerca el rostro de la pobreza, se vieron lanzados a la supervivencia y a la informalidad, acentuando los ya difíciles problemas del desempleo y la inequitativa distribución del ingreso. Además, estos eventos de carácter económico terminaron con la escasa credibilidad de las gentes en la capacidad de dirección de la élite, en la bondad de su gestión, en la posibilidad de su proyecto, introduciendo factores de incertidumbre y de desconfianza que indudablemente coadyuvaron a la atomización, a la inorganicidad, a la pérdi-

da de referentes y a la carencia de horizontes de futuro que caracterizan las crisis de descomposición.

El estancamiento del modelo de industrialización, si bien afectó a todo el país, se sintió con más fuerza y dureza en la región antioqueña, pues fue el Valle de Aburrá su principal centro de operaciones. Por eso sus efectos erosionantes afectaron primero a ésta que a otras ciudades colombianas y fenómenos como la delincuencia juvenil y el incremento en la criminalidad urbana no son ajenos a estas situaciones que venimos describiendo; de hecho, ciudades norteamericanas y europeas que han vivido el agotamiento de viejos modelos industriales se han visto afectadas por eventos de la misma naturaleza.

**El escenario de lo internacional.** La crisis en el modelo económico legal y la pérdida de dinamismo de la economía antioqueña, coincidió en el tiempo con el ascenso de la economía ilegal propiciada por el tráfico de drogas y otras sustancias alucinógenas, cuyos mercados externos crecían en dimensiones astronómicas, en tanto que se estrechaban y se volvían inelásticos para los productos exportables de la economía legal.

El tráfico de drogas aparecía pues como un horizonte de posibilidad para sectores sociales tradicionalmente excluidos pero formados en la mentalidad empresarial propiciada por el ethos sociocultural decimonónico, para sectores venidos a menos con las crisis de los años anteriores y para algunos agentes de la economía formal que veían en los dólares del narcotráfico una manera de remontar las dificultades del momento.

Pero la actividad del narcotráfico se alimentó también de los efectos erosivos producidos por el hundimiento de un proyecto político y ético cultural orgánico que no fue sustituido; por la ausencia de salidas a una crisis de crecimiento que fragmentó el poder, debilitando y desinstitucionalizando las organizaciones públicas y privadas; por la deslegitimaciones y la carencia de factores estructurantes que le otorgasen alguna forma de organicidad al conglomerado social y, por qué no decirlo, de una inicial actitud tolerante por parte de las autoridades y, también de los sectores dominantes que no lograron avizorar los efectos que a mediano plazo tendría la consolidación del negocio de las drogas.

Mas esta actividad y la violencia que trae aparejada, no empieza ni termina en la región antioqueña, sale de sus límites y los del país para inscribirse en una órbita internacional por definición: internacionales son sus mercados principales, los abastecimientos de materias primas para la transformación de la base de coca en cocaína y lo es el comercio de las armas que se traen para garantizar los procesos asociados con el tráfico.

La lucha mundial contra el consumo de drogas, convirtió a Colombia y especialmente a la región antioqueña, en el único escenario donde se libra una guerra

internacional que desborda tanto las causas que incrementan el consumo de drogas como las posibles soluciones que no pueden circunscribirse al ámbito nacional y mucho menos departamental. Sin embargo, esa guerra se libra aquí y sus víctimas las está poniendo el pueblo colombiano, cuota en la que Antioquia lleva la mayor parte.

Por estas razones, en pocos años el narcotráfico y el narcoterrorismo lograron efectos más traumáticos y erosionantes sobre el tejido social de la región, que el que hubiese logrado producir el viejo conflicto armado de la insurgencia y la contrainsurgencia, no sólo por la capacidad de penetrar en la vida institucional y en los organismos que tenían la obligación de combatirlo sino porque esta actividad, para su desarrollo, requiere la neutralización de cualquier forma de acción del Estado; la propuesta, si es que hay alguna, es la del “no Estado”, la negación de cualquier forma de institucionalidad, de regulación, de orden y de capacidad de represión.

Si bien los poderes armados del narcotráfico se localizaron en las territorialidades alternas y tradicionalmente excluidas de la región, tanto rurales como urbanas, su incidencia sociopolíticas y económica desborda con mucho su expresión territorial, pues esta actividad afectó también la sociedad mayor, el espacio geodemográfico tradicional y penetró desigualmente en las instituciones de la vida civil y política y en organizaciones muy importantes de la sociedad civil.

**¿Hacia una crisis de descomposición?** En la situación de violencia que vive el departamento, se imbrican, se confunden y se refuerzan mutuamente las deslegitimaciones políticas y las formas de la delincuencia organizada, propiciando, en algunos territorios más que en otros, formas críticas de descomposición del tejido social, pero en todos ellos una dramática fragmentación del poder, que yuxtapone parcelas controladas por fuerzas diversas que dirimen el control territorial mediante el ejercicio de la violencia y en el escenario de las masacres colectivas.

En algunos de los territorios del conflicto predominan formas de violencia que se corresponden con procesos de crecimiento, aunque no están ausentes las expresiones de descomposición. Es el caso de la región de Urabá y de algunas zonas del Bajo Cauca; en otros espacios territoriales, con presencia de grupos narcoterroristas, con severo estancamiento económico y conflictos políticos de vieja data, predominan las formas de descomposición del tejido social: es el caso de la ciudad de Medellín y las poblaciones del Valle de Aburrá.

En estos contextos complejos y diferenciados los poderes institucionales, pero también los alternativos carecen de capacidad efectiva para concitar consensos amplios o para imponerse a sus contendores mediante el uso de las armas; deslegitimaciones e inorganicidades que se expresan también en los ámbitos no estatales, en la sociedad civil, en la esfera privada, en los mundos vecinales y familiares

y hasta en los comportamientos individuales de los sujetos siendo los más notorios los siguientes:

- La disolución de las redes y las tramas socioculturales y políticas, en razón de la ausencia o relativa inoperancia de factores estructurantes verdaderamente orgánicos. Esta disolución o atomización social restringe el ámbito de las identidades y los sentidos de pertenencia a sus espacios más primarios —la familia, el círculo de los más allegados— con lo cual aumentan los umbrales de tolerancia a la violencia, pues una muerte sólo es sentida como propia por grupos pequeños de personas. “Indiferencia a la violencia” es la expresión popular para nombrar los fenómenos de la atomización y de la inorganicidad que constituyen el medio propicio para la generalización del terror.
- La disolución de las tramas institucionales y jurídico legales de las ramas del poder público y las organizaciones más importantes de la sociedad civil: el poder ejecutivo, el parlamento, la justicia, el ejército, los organismos de seguridad, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, los sindicatos, las asociaciones, los partidos que, afectados por la crisis, se vuelven inorgánicos, se atomizan y se fracturan, dando paso a la formación de “parcelas de poder” al interior de la institucionalidad misma, con lo cual estos organismos dejan de cumplir las funciones cohesionadora, reguladoras, y ordenadoras en la sociedad. Lo público se privatiza, se individualiza y se vuelve asunto de cada cual, llegándose por esta vía a la situación hobbesiana de guerra de todos contra todos.
- La otra dimensión del tejido social es la intersubjetiva: las personas son afectadas individualmente en sus comportamientos, sus prácticas y sus procedimientos. Gentes que en situaciones de relativa estabilidad y vigencia institucional se comportaban como buenos ciudadanos respetuosos de las leyes y cumplidores de sus obligaciones, en contextos de terror propiciados por inorganicidad y la atomización pueden llegar a la comisión de actos inimaginables, a proceder abiertamente delincuenciales y violentos.

Las crisis de descomposición combinan pues muchos elementos viejos y nuevos; además no son estáticas. A la sombra de la crisis de descomposición colectivamente vivida, se van formando nuevas mentalidades, otras cosmovisiones e identificaciones, nuevos referentes donde la violencia juega un papel clave (se admira al duro, al fuerte, al que despliega más poder y capacidad de sujeción) y, también, nuevas asociaciones para defenderse de la violencia o para ejercerla: el incremento de las bandas juveniles en Medellín y el fenómeno del sicariato revelan procesos como los que estamos describiendo.

Lo que caracteriza la crisis de descomposición es su esterilidad. No puede producir más que atomización, inorganicidad y terror, ahogando pequeños y grandes esfuerzos para articular un orden social nuevo como los que se realizan hoy en

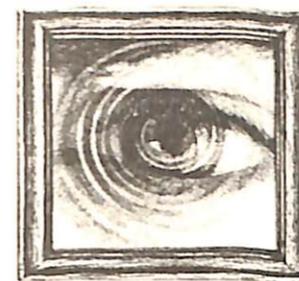
muchos lugares del país y del departamento; en cambio las crisis de crecimiento (si no cambian de signo por el estancamiento o la ausencia de proyectos políticos realmente convocantes), alumbran siempre grandes transformaciones económicas y cambios políticos de mucha significación.

En el caso antioqueño se combinan ambas formas de crisis y se expresan desigualmente a lo largo y ancho de todo el territorio de la región. Mas por primera vez en la historia, el espacio geodemográfico de la sociedad mayor, la vieja territorialidad sociohistórica, la columna vertebral del pueblo antioqueño y su centro dinamizador, Medellín, se ve permeada por los conflictos manifestados en los espacios de exclusión. No es posible convivir mucho tiempo con la exclusión sin que ella termine por penetrar y descomponer los espacios integrados y articulados.

Las alternativas de solución tienen que ser múltiples y diversas, orientadas tanto a desactivar los conflictos armados como a superar las deslegitimidades políticas, la atomización y la descomposición del tejido social.

En el primer campo, donde Antioquia es escenario de conflictos nacionales e internacionales (contrapoderes, parapoderes y narcotráfico), se requiere un protagonismo regional para propiciar negociaciones de paz con los alzados en armas, así como para el desmonte de los grupos paramilitares. En el contexto internacional, y con relación a los problemas del narcotráfico, el protagonismo regional debe apuntar hacia la desnacionalización y desregionalización de la guerra y de la internacionalización de las soluciones.

En lo que tiene que ver con las deslegitimidades políticas, se requiere una presencia orgánica y de amplia representatividad de la región en el Estado nacional, que tiene que pasar por la dinámica de las inclusiones, por las prácticas de la democracia participativa, por el pluralismo político, étnico, cultural y social y por la ampliación del horizonte económico; pero quizá donde se debe desarrollar un trabajo más sostenido, más ambicioso y de mayor alcance, es en lo que tiene que ver con la recomposición del tejido social, mediante un proyecto ético cultural orientado hacia la modernidad, que convierta en referentes de identidad valores como los de la tolerancia, democracia, el respeto por el otro, en fin, una ética civil que sirva como eje estructurante de una nueva identidad nacional, única posible en la modernidad.



## Capítulo II

# EL CIUDADANO Y LA POLÍTICA